

Santiago, uno de abril de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°.- Que, en este juicio ordinario, se ha ordenado dar cuenta de la admisibilidad del recurso de casación en el fondo deducido por la demandada, en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que confirmó el fallo de primera instancia de doce de agosto de dos mil veintitrés, que acogió la demanda de cobros de pesos, condenando a la demandada a pagar al actor la suma de \$11.025.233, más reajustes.

2°.- Que en su recurso de invalidación sustancial, la impugnante expresa que la sentencia cuestionada ha contravenido los artículos 1545 1569, 1700 y 2116 y siguientes del Código Civil, argumentando básicamente, que no se acreditó la existencia de una obligación contractual expresa que obligue a la demandada al pago de una suma determinada de dinero. Agrega que no existen antecedentes fehacientes que demuestren que el demandante cumplía con los requisitos necesarios para percibir los subsidios reclamados y que el documento denominado Acta de Socios de Sociedad de Transportes Cóndor S.A., solo hace fe en cuanto al hecho de haberse otorgado y su fecha, pero no en cuanto a la verdad de las declaraciones en él contenidas.

Por último, sostiene que la acción apropiada era de la rendición de cuentas y no la de cobro de pesos.

3°.- Que las infracciones que la recurrente estima que se han cometido por los jueces del fondo, persiguen desvirtuar los supuestos fácticos asentados por ellos, esto es, que la Asamblea Extraordinaria de Socios de la empresa demandada, reconoció que se retuvo dineros del demandante por conceptos de subsidios y de la Tarjeta Nacional Estudiantil, ascendentes a \$19.660.675, realizándose un abono mediante vale vista por la suma de \$8.635.437, quedando un saldo impago de \$11.025.233, que los socios de la sociedad no quisieron pagar.

A este respecto es preciso recordar que solamente los jueces del fondo se encuentran facultados para fijar los hechos de la causa y que al ser efectuada correctamente dicha labor, determinándolos con sujeción al mérito de los antecedentes, probanzas aportadas por las partes, interpretación y aplicación de las normas atinentes al caso, ellos resultan inamovibles para este tribunal, conforme a lo previsto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, no siendo posible su revisión por la vía de la nulidad que se examina, a menos que se hayan impugnado denunciando infracción a las normas reguladoras de la prueba, que de ser efectivas, permitan a esta Corte alterar la referida situación fáctica.

4°.- Que, en este orden de ideas, se constata del tenor del recurso deducido, que entre las infracciones normativas que denuncia por su intermedio, el impugnante



otorga el carácter de normas reguladoras de la prueba al artículo 1700 del Código Civil. Sin embargo, un examen de los antecedentes no permite advertir su contravención, toda vez que del análisis del fallo recurrido se colige que los jueces del fondo no alteraron el carácter de público o privado de los instrumentos aparejados al juicio, ni desconocieron su mérito probatorio, evidenciándose en las alegaciones de la recurrente más bien la aspiración a una nueva valoración de los documentos, actividad que resulta extraña a los fines de la casación en el fondo.

5°.- Que aun cuando lo precedente ya resulta bastante para definir el rechazo del recurso, cabe consignar, que el recurrente en su libelo de nulidad, sólo hace valer el error de derecho en la infracción de los preceptos ya señalados, pero omite extender la infracción legal a las normas sustantivas relativas la acción deducida, que tienen el carácter de decisoria de la litis, es decir, preceptos que al ser aplicados permiten resolver la cuestión controvertida, cuales son, entre otros, los artículos 1437, 1546 y 1557 del Código Civil y los artículos 1 y 3 b) de la Ley N°20.378, lo que lleva a concluir que el recurrente los supone bien aplicados, impidiendo así el acogimiento de este arbitrio, desde que los demás errores denunciados carecerían de influencia sustancial en lo dispositivo del fallo.

Por estas consideraciones y de conformidad además con lo dispuesto en los artículos 772 y 782 del Código de Procedimiento Civil, **se rechaza** el recurso de casación en el fondo interpuesto por la abogada Mónica Pávez Muñoz, en representación de la sociedad demandada, en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción, de fecha treinta de enero de dos mil veinticinco.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 5.696 – 2025.





Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Arturo Prado P., Mauricio Alonso Silva C., María Angélica Cecilia Repetto G., Mario Carroza E. y Abogado Integrante Raul Fuentes M. Santiago, uno de abril de dos mil veinticinco.

En Santiago, a uno de abril de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

